El control de regularidad constitucional respecto de candidaturas independientes

Jesús G. Perales

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN. 2. CONCEPTO Y ELEMENTOS DEL CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. 3. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 4. ALGUNAS PROBLEMÁTICAS DEL CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL RESPECTO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 5. CONCLUSIONES. 6. BIBLIOGRAFÍA.

1. Introducción

El reconocimiento de las candidaturas independientes, como modalidad de ejercicio del derecho al sufragio, constituye un elemento relevante al calificar los sistemas político-electorales democráticos.

La forma en que dicho régimen es implementado, además de impactar en su vigencia y aplicabilidad, implica el desarrollo y concretización de un derecho fundamental, por lo que se trata de una cuestión que amerita un “control de regularidad constitucional”.

Tales son las temáticas del presente texto. Primero se explica el concepto y características del control de regularidad constitucional. Después se alude a la fundamentalidad de los derechos políticos y, en dicho contexto, se explica el régimen de candidaturas independientes.

Finalmente, se alude a las problemáticas que implica el control de regularidad constitucional de las normas locales relativas a candidaturas independientes.

Particularmente, interesa resaltar que los juicios de control de regularidad constitucional que se dictan al respecto, se sustentan en consideraciones de derecho comparado y, en el mejor de los casos, en argumentos relativos a distorsiones en el sistema electoral en su conjunto o violaciones al derecho de

---

igualdad, pero escasamente se alude al contenido esencial del derecho fundamental de que se trata.

2. Concepto y características del control de regularidad constitucional

El Estado constitucional de derecho se caracteriza, esencialmente, por la sujeción de ciudadanos, órganos de poder y leyes a los mandatos de la Constitución que, en su carácter de Norma Fundamental, organiza al Estado y reconoce derechos humanos.

Ante la posibilidad de que el orden constitucional pueda ser transgredido y los derechos humanos vulnerados, se establecen mecanismos judiciales de defensa y protección o garantía.

Tales procedimientos tienen como objetivo constatar si los actos o leyes en cuestión respetan el orden constitucional y los indicados derechos. De no ser así, la decisión judicial prescribe su invalidez o inaplicación. En eso consiste el control constitucional o de constitucionalidad.

Por otra parte, los Estados suscriben convenios con otros sujetos de derecho internacional, respecto de múltiples materias, incluyendo la relativa a los derechos humanos.

Lo ahí acordado se integra al orden jurídico interno, por regla general. Las normas convencionales se colocan en una determinada posición jerárquica y comienzan a regir al interior del Estado.

Tales disposiciones de origen internacional también pueden ser incumplidas y los derechos humanos por ellas reconocidos pueden ser violados. Por tal motivo, también existen procedimientos judiciales de garantía y protección, particularmente, para lograr el respeto de los derechos humanos reconocidos en favor de las personas. Es lo que constituye el control de convencionalidad.

Si bien podría calificarse como control de convencionalidad el estudio de compatibilidad entre los actos de autoridad y cualquier tratado internacional, el término se utiliza en referencia al análisis que se efectúa con base en tratados que

---

contienen normas de derechos humanos, porque es en dicha materia donde se ha configurado el concepto.¹

En el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, la doctrina del control de convencionalidad surge en el año dos mil seis, en la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso *Almonacid Arellano vs. Chile*.

Aquí se determinó que, una vez suscrito un tratado internacional en materia de derechos humanos, como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Poder Judicial del Estado firmante está obligado a velar porque los efectos de la misma no se vean perjudicados por leyes internas que le sean contrarias, por lo que los jueces nacionales deben realizar una labor de control, tomando en consideración la interpretación que el tribunal interamericano haya dado a la Convención.²

En otra sentencia del mismo año, la Corte Interamericana indicó, de manera específica, que los órganos del Poder Judicial no sólo deben ejercer control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad, que dicho control procede de oficio y que debe ejercerse dentro del marco de las competencias y regulaciones procesales correspondientes.³

A partir de entonces la doctrina se consolidó, al ser reiterada en más de una decena de casos.⁴

En un momento posterior, la Corte Interamericana ha dicho que todos los “jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer *ex officio* un ‘control de convencionalidad’ entre

---

¹ Herrerías Cuevas, Ignacio Francisco, *Control de convencionalidad y efectos de las sentencias*, México, Editorial UbiJus, 2011, pp. 84.

² Sentencia del caso *Almonacid Arellano vs. Chile*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafos 123 y 124.

³ Sentencia del caso *Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006, párrafo 128.

⁴ Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Reflexiones sobre el control difuso de convencionalidad, a la luz del caso *Cabrera García y Montiel Flores vs. México*”, *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, México, Nueva serie, Año XLIV, 2011, núm. 131, mayo-agosto, pp. 923 <http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/131/inf/inf20.pdf>

---

las normas internas y la Convención Americana”. Asimismo, ha reiterado que al realizar dicha función se debe tener en cuenta no solo el tratado internacional, sino la interpretación que del mismo ha hecho el tribunal interamericano, como su último intérprete.⁵

Evidentemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos también realiza control de convencionalidad. En los casos de su conocimiento se reclaman, precisamente, actos u omisiones que se señalan como violatorios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros tratados que forman parte del sistema.

Podría decirse que, dependiendo del órgano que lo lleva a cabo, existen dos tipos de control de convencionalidad: el de sede internacional y el de sede interna.

Sin embargo, en realidad este último implica un control de constitucionalidad, aunque de forma indirecta. Cuando el juez nacional resuelve la convencionalidad de los actos de autoridad, en última instancia está salvaguardando el mandato constitucional que confiere jerarquía, obligatoriedad y respeto a las normas internacionales que han sido incorporadas al derecho interno.

El control de regularidad constitucional es, por tanto, el estudio que se realiza de los actos de autoridad -particularmente las leyes-, a fin de determinar si son compatibles con los derechos humanos reconocidos en la Constitución federal y en los tratados internacionales que han sido incorporados al orden jurídico interno, considerando en dicho análisis la jurisprudencia de los tribunales nacionales, así como la de los de orden internacional que tengan a su cargo la interpretación de la convención internacional en cuestión.

Pueden identificarse tres elementos del control de regularidad constitucional: subjetivo, objetivo y formal.

El elemento *subjetivo* está referido a los sujetos que pueden llevarlo a cabo. Deben realizarlo todos los jueces y demás órganos vinculados con la administración de justicia, independientemente de cuál sea su jerarquía, grado,

---

⁵ Sentencia del caso Cabrera García y Montiel Flores vs México, Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, párrafo 225.

---

cuantía, materia o cualquier otra categorización, atendiendo a las competencias que correspondan a cada autoridad y respetando las regulaciones procesales correspondientes.

En cuanto al control de constitucionalidad, se suele distinguir entre sistemas de control concentrado o difuso, dependiendo de si la atribución se confiere a los órganos cúspide del sistema judicial o a determinadas instancias de orden federal o nacional, o bien, a todos los órganos o jueces del sistema.

En México, antes de que se dictara la resolución de cumplimiento de la sentencia del caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, el control de constitucionalidad estuvo a cargo exclusivamente de los jueces federales. Es decir, existía un sistema de control concentrado.⁶

Sin embargo, la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano que todos sus jueces efectuaran control de convencionalidad⁷, lo que obligó a un cambio de paradigma en cuanto al control de constitucionalidad, puesto que no es posible atribuirles aquella facultad, sin conferirles esta última.

Por tanto, en la actualidad, el control de regularidad constitucional lo realizan todos los jueces del país, en el marco de sus respectivas competencias.⁸

Debe precisarse, sin embargo, que si bien todos los jueces del país pueden realizar control de regularidad constitucional, sólo los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación –cuando actúan como jueces constitucionales– pueden declarar la falta de regularidad de los preceptos, es decir, invalidarlos o anularlos. En la potestad de los demás juzgadores únicamente queda inaplicar los preceptos en cuestión, para el caso concreto.

---

⁶ Angulo Jacobo, Luis Fernando, “El control difuso de convencionalidad en México”, *Revista del Instituto de la Judicatura*, México, 2013, Número 35, pp. 71.

⁷ Sentencia del caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009.

⁸ Jurisprudencia 18/2012 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011). *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1; Pág. 420.

El elemento *objetivo* está referido al parámetro que sirve de base para realizar el control de regularidad constitucional.

El control de regularidad constitucional presupone considerar las disposiciones que reconocen derechos humanos -ya sean de tipo constitucional o internacional, o mejor dicho, sin distinguir la fuente de las mismas-, como un conjunto de normas que configuran, en su estrecha interrelación y particular funcionalidad, el entramado de derechos fundamentales con base en el cual se realiza el estudio de compatibilidad.

Si bien se trata de disposiciones dispersas y de distinta fuente, conforman un conjunto de normas con características propias y, lo que es más importante, con reglas específicas de interpretación.

Hasta épocas relativamente recientes, era común hablar de bloque de constitucionalidad⁹, para referirse al conjunto de normas de derechos humanos que habrían de utilizarse en el control de convencionalidad.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó el concepto de “parámetro de control de regularidad constitucional”¹⁰, por estimar que la idea del bloque de constitucionalidad no coincidía plenamente con la realidad a atender.

En cuanto a la manera en que se conforma el referido parámetro, en un primer momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que se integraba por los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano fuera parte; por la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación; por los criterios vinculantes de la Corte

---

⁹ Tal concepto tiene su antecedente en Francia, aunque se trata de una institución con características y finalidades que no son necesariamente coincidentes con las que corresponden al control de convencionalidad que realizan la mayoría de las Cortes Constitucionales latinoamericanas. Ver Rubio Llorente, Francisco, *La forma del poder*, 3a. ed., Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2012, vol. 1, pp. 103 y 109.

¹⁰ Sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de Tesis 293/2011, foja 31.

Interamericana de Derechos Humanos; así como por los criterios orientadores contenidos en la jurisprudencia y precedentes de dicho tribunal internacional.¹¹

Posteriormente precisó que “la fuerza vinculante de los criterios interpretativos contenidos en sentencias interamericanas debe extenderse a aquellas dictadas en casos en los que el Estado mexicano no haya sido parte”.¹²

Fue por la necesidad de cumplir con la obligación de efectuar el control judicial de convencionalidad, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el parámetro para llevarlo a cabo.

Sin embargo, el último pronunciamiento al respecto –sentencia de la Contradicción de tesis 293/2011- se hizo con motivo de determinar la posición jerárquica de las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales, respecto de la Constitución federal, así como para establecer el valor de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.¹³

En dicha sentencia señaló que la interpretación que realizaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estaba referida al ámbito material de protección del juicio de amparo¹⁴, lo que no necesariamente rige respecto de otros mecanismos de garantía, ya sean de índole federal o local.

Por tanto, lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha realizado un estudio específico para esclarecer cuál es el contenido del referido parámetro.

No fueron consideradas, como parte del parámetro de control, diversas normas que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano y que reconocen derechos humanos, por lo que no está claro si tales disposiciones y los derechos en ellas

---

¹¹ Sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Expediente Varios 912/2010, párrafo 21.

¹² Sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de Tesis 293/2011, fojas 37 y 44.

¹³ Ídem, foja 18.

¹⁴ Ídem, fojas 37 y 44.

---

reconocidos deben tomarse en consideración al efectuar el control de regularidad constitucional, según se expondrá más adelante.

Finalmente, el elemento *formal* está referido a los instrumentos mediante los cuales opera el control de regularidad constitucional, pues este último no es un simple ejercicio de comparación entre el acto de autoridad y las disposiciones de derechos humanos que correspondan, a fin de determinar si son o no compatibles.

El análisis de regularidad implica dos sub principios o vertientes, al menos en lo que concierne al sistema adoptado por la Constitución federal mexicana: el principio pro persona y el principio de interpretación conforme.

El principio pro persona implica, en un primer aspecto, la obligación de los operadores jurídicos de ubicar y utilizar el precepto que resulte más protector para la persona, en el caso en cuestión. Está establecido en el párrafo segundo del artículo primero de la Constitución federal.

Por otra parte, está referido a la obligación de los operadores jurídicos de optar, de entre las posibilidades argumentativas del precepto aplicable, por aquella más favorable a los intereses de la persona. Es decir, de efectuar una interpretación extensiva para potencializar el derecho humano de que se trate.

Si bien el acto de autoridad o la disposición bajo análisis están plenamente identificados, es necesario ubicar las normas de derechos humanos que –por su materia- servirán para el caso concreto, de entre aquellas que conforman el parámetro de regularidad constitucional en su totalidad. Debe identificarse, también, la interpretación que de las mismas se ha llevado a cabo por los órganos competentes, a fin de determinar cuál de ellas resulta más favorecedora o protectora para la persona.

De esta manera se cumplen diversos objetivos. Por una parte, es posible identificar cuál de las normas tiene un contenido más extenso en sí mismo, en cuanto al contenido del derecho. También se verifica cuál de los preceptos tiene el contenido interpretativo más desarrollado, en orden de proteger a la persona. Hasta ese momento es posible discernir cuál de los preceptos en cuestión

favorece más a la persona en el caso concreto, realizando la interpretación más extensiva en su beneficio.

La interpretación conforme también está establecida como principio en el segundo párrafo del artículo primero de la Constitución federal. Supone que las disposiciones o preceptos admiten diversas interpretaciones.

Significa, en primer término, que cualquier interpretación que se efectúe respecto de preceptos relativos a derechos humanos, se realice de acuerdo al parámetro de control de regularidad constitucional. Es decir, que las normas de derechos humanos se interpreten en congruencia con el cúmulo de normas constitucionales e internacionales, así como con los criterios jurisprudenciales relativos.

También implica que, ante diversas interpretaciones posibles del precepto bajo análisis, se prefiera aquella que lo haga compatible con el parámetro de regularidad constitucional, evitando de dicha manera su invalidación o inaplicación.

El propósito del sistema no es efectuar una verificación formal de la convencionalidad, como un fin en sí mismo. Se trata de proteger los derechos humanos de las personas. Por tanto, cuando las normas admiten más de una interpretación, debe optarse por aquélla que la haga compatible con el parámetro de control de regularidad, si con eso basta para garantizar el derecho humano en cuestión.

Lo que se busca no es declarar, sin más, que determinada disposición es contraria a cierto convenio internacional y, por consecuencia, deba dejar de aplicarse. Tal proceder repercutiría en la configuración del sistema normativo en su conjunto, afectándolo en sus valores de permanencia, integralidad y certeza.

2. Candidaturas independientes

Los derechos políticos son aquellos atributos, facultades o titularidades de la persona, que permiten hacer efectiva su participación como ciudadano de un determinado Estado.¹⁵

Si bien durante mucho tiempo se les consideró materia del derecho constitucional y no se les comprendía entre los derechos humanos¹⁶, en la actualidad se les entiende como una categoría más de estos últimos y se les encuadra, generalmente, entre los llamados derechos de primera generación.

Tradicionalmente se ha entendido que el núcleo esencial de los derechos políticos lo constituyen los derechos al sufragio activo y pasivo respecto a cargos de elección popular; el derecho de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad; así como los derechos de asociación y petición en materia política.

Sin embargo, refiere Manuel Aragón que sea cual sea la forma de enfocar el objeto del derecho electoral, el sufragio sobresale como elemento esencial¹⁷.

En dicho sentido, es válido afirmar que dentro del cúmulo de atributos o facultades que se comprenden en el concepto de derechos políticos, el derecho o facultad de sufragio es fundamental o principal.

Como es sabido, el derecho al sufragio tiene dos vertientes o modalidades, una activa y otra pasiva, que se traducen, en términos llanos, en las posibilidades jurídicas de votar y ser votado, respectivamente.

El derecho de sufragio pasivo puede definirse como el derecho individual a ser elegible para los cargos públicos o, siendo más precisos, se trata del derecho a

---

¹⁵ Picado, Sonia, “Los derechos políticos como derechos humanos”, en *Treatise on Compared Electoral Law of Latin America*, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2007, http://www.idea.int/publications/electoral_law_la/upload/III.pdf

¹⁶ Fix-Zamudio, Héctor, *Estudio de la defensa de la constitución en el ordenamiento mexicano*, México, Editorial Porrúa, 2011, p. 347.

¹⁷ Aragón, Manuel, “Derecho electoral: sufragio activo y pasivo”, en Dieter Nohlen et al. (comps), *Tratado de derecho electoral comparado de América Latina*, México, Fondo de Cultura Económica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Universidad de Heidelberg, International IDEA, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e Instituto Federal Electoral, 2007, p. 179.

---

participar o presentarse como contendiente o candidato en las elecciones populares, a fin de ser electo para ocupar determinado cargo o función públicos.¹⁸

Tal aptitud o facultad está reglamentada en el ordenamiento constitucional y legal de cada país, de tal forma que quien pretenda participar o postularse como candidato en determinada elección, debe satisfacer los requisitos que el marco normativo señale.

Uno de los requisitos tradicionalmente establecidos para participar como candidato en las elecciones populares, es ser postulado por un partido político, ya sea que se esté afiliado al mismo o no.

Este requisito trasciende el aspecto individual relativo a la titularidad y ejercicio del derecho al sufragio, pues impacta profundamente en la configuración del sistema político-electoral en su conjunto, en tanto que confiere a los partidos políticos un papel protagónico.

Además, las “regulaciones técnicas de las candidaturas inciden con claridad en la formación de las preferencias de los electores y, por consiguiente, en los resultados electorales”¹⁹, de tal forma que lo que al respecto se determina deviene muy trascendente para la vigencia de la vida democrática de los países.

El monopolio de los partidos políticos en la postulación de candidatos a puestos de elección popular se critica frecuentemente, con el argumento de que no es conciliable con los derechos de libertad e igualdad²⁰, por lo que constituye una restricción indebida o no razonable al derecho fundamental de ser votado, aunado a la serie de consecuencias políticas que se generan en dichos sistemas, como son la burocratización de los partidos políticos y su distanciamiento de la sociedad.²¹

---

¹⁸ *Íbidem.* p. 185.

¹⁹ Fernández Segado, Francisco, “Las candidaturas electorales”, en Dieter Nohlen et al. (comps.), *Tratado de derecho electoral comparado de América Latina*, Op. Cit. p. 527

²⁰ Sentencia del caso Yatama vs. Nicaragua, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005, párrafo 199.

²¹ Aragón, Manuel, Op. Cit., p. 197

Asimismo, se argumenta que el monopolio de los partidos políticos en la postulación de candidatos merma la su capacidad de toma de decisiones del cuerpo electoral²², al centralizarla en las dirigencias partidistas, de tal manera que, en última instancia, la voluntad estatal se traduce en arreglos políticos entre las cúpulas de los partidos políticos.

En los sistemas político-electorales que no restringen en los partidos políticos la posibilidad de postular candidatos, se permite que estos últimos se inscriban por sí mismos o a través de otro tipo de agrupaciones sociales, siempre que cuenten con el respaldo de determinado número de adeptos a la postulación.

Esta posibilidad de participación ajena a los partidos políticos es lo que constituye las denominadas candidaturas independientes, aunque algunos autores también califican como tales a los presentados por los partidos políticos, cuando se trata de personas no afiliadas a los mismos (candidatos externos), así como a los que sin estar registrados formalmente como participantes en el proceso electoral, sus nombres son anotados por los electores en la boleta, el día de la jornada electiva.²³

En cuanto a su consideración en el ámbito interamericano de derechos humanos, la Corte Interamericana señaló, en un primer momento, que “no existe disposición en la Convención Americana que permita sostener que los ciudadanos sólo pueden ejercer el derecho a postularse como candidatos a un cargo electivo a través de un partido político” y que si bien no se desconoce la importancia que estos últimos revisten como formas de asociación indispensables para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia, existen otras “formas” de impulsar candidaturas para cargos de elección popular, “cuando ello es pertinente e incluso

---

²² De la Peza, José Luis, “Candidaturas independientes”, en Dieter Nohlen et al. (comps), *Tratado de derecho electoral comparado de América Latina*, Op. Cit., p. 613. En el mismo sentido, ver la Observación General No. 25, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, citada con anterioridad.

²³ Hernández Olmos, Mariana, “Candidaturas independientes. Experiencias y Desafíos”, en Karolina Giles y Medina Torres (coords.) *Candidaturas independientes. Desafíos y propuestas*, México, Tirant lo Blanch, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e Instituto Estatal Electoral de Morelos, 2014, p.329. y González Oropeza, Manuel, *Candidaturas independientes*, <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/sufragio/cont/4/ens/ens7.pdf>.

---

necesario para favorecer o asegurar la participación política de grupos específicos de la sociedad”.²⁴

Tal señalamiento parecía sugerir un decantamiento por el sistema de libre postulación de candidaturas. Sin embargo, se efectuaron con motivo de un litigio en el cual estaba involucrada una colectividad indígena, de tal manera que se atendió preponderantemente a la necesidad de ponderar la situación particular de dicho grupo social.

En un momento posterior, el Tribunal Interamericano utilizó el recurso del margen de apreciación nacional para concluir que la Convención Americana sólo establece un estándar mínimo de garantías para el ejercicio del derecho al sufragio, pero no limita la aptitud de los Estados para reglamentar el ejercicio de los derechos políticos, lo cual pudiera implicar que la postulación de candidaturas podría llegar a monopolizarse en los partidos políticos, si se estima que tal regulación está dirigida a cumplir con una finalidad legítima, necesaria y proporcional; es decir, si es razonable²⁵.

En otras palabras, para el tribunal interamericano, tanto el régimen de monopolio de los partidos políticos, como la implementación de candidaturas autónomas o independientes, son convencionales.

Por tanto, está al arbitrio de los tribunales nacionales calificar si el régimen específicamente establecido para regular las candidaturas a cargos de elección popular, incluyendo las autónomas o independientes, es conforme al parámetro de regularidad constitucional.

3. Algunas problemáticas del control de regularidad constitucional respecto de candidaturas independientes

---

²⁴ Sentencia del caso *Yatama vs. Nicaragua*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005, párrafo 215.

²⁵ Sentencia del caso *Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008, párrafo 149.

Una primera problemática está referida a la configuración general del parámetro de control de regularidad constitucional.

Como ya fue explicado en el primer apartado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado fuera del parámetro de regularidad constitucional, diversos preceptos que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano y que reconocen derechos humanos, por lo que no está claro si tales disposiciones y los derechos en ellas reconocidos deben tomarse en consideración al efectuar el control de regularidad constitucional.

Un claro ejemplo de la problemática que surge de dicha indefinición se evidencia con las Constituciones Políticas de cada uno de los Estados de la República.²⁶ Tales cuerpos constitucionales son, en muchas ocasiones, más protectores que la Constitución federal al reconocer determinados derechos humanos o incluso reconocen derechos de los que aquélla no se hace cargo.

El control de regularidad constitucional implica, entre otras cuestiones, la identificación del conjunto de normas que reconocen el derecho humano en cuestión. Asimismo, conlleva la identificación, de entre todas ellas, la que sea más favorable a la persona, en el caso concreto. Es decir, la aplicación del principio pro persona.²⁷

En otras palabras, los jueces deben ubicar, en el entramado de normas de derechos humanos relativas a la materia –el parámetro de control- aquella que por el contenido que establece para el derecho –el tipo del derecho fundamental- o por la configuración de las restricciones al mismo, resulta la más favorable para la persona, de ahí que para cumplir con dicho proceso resulte indispensable saber a qué cuerpos normativos es dable acudir.

---

²⁶ Si bien la problemática podría plantearse respecto de otros ordenamientos de distinto rango (leyes generales, leyes locales, reglamentos, etcétera), me limitaré, para los efectos de este trabajo, a determinar si las Constituciones locales deben considerarse parte del parámetro de control de regularidad constitucional y, de ser así, estudiar algunas de las implicaciones de dicha conclusión.

²⁷ Carmona Tinoco, Jorge Ulises, *“Apuntes al control de convencionalidad”*, p.8, http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/apuntes_al_control_de_convencionalidad.pdf

---

Al realizar dicho ejercicio, bien puede suceder que los jueces adviertan que la norma más favorable no se encuentra ni en la Constitución federal ni en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, sino en un ordenamiento interno diverso, como pueden ser las Constituciones de las entidades federativas, ante lo cual cabe preguntarse si tales disposiciones deben considerarse parte del parámetro de regularidad constitucional.

La cuestión adquiere un grado de dificultad mayor, si se toma en consideración al sujeto operador de la norma que, en la mayoría de los casos, será el juez ordinario –no constitucional- que tiene a su cargo resolver una determinada controversia planteada.

Puede suceder, por ejemplo, que quien debe resolver el conflicto es un juez de alguno de los Estados de la República, a quien se le llama la atención respecto de que determinada disposición legal debe inaplicarse por inconstitucional o inconveniente, o bien, que amerita una interpretación conforme.

Para resolver la controversia, es indispensable que el juez en cuestión establezca, conociendo la norma de mérito y la materia o situación que regula, cuál es el conjunto de preceptos que le servirá de parámetro para realizar el ejercicio de compatibilidad y, de ser el caso, para realizar la interpretación conforme que permita la aplicación válida del precepto.

Dicho juzgador tiene, por una parte, el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a que el parámetro de control de regularidad constitucional se configura, como ha sido indicado, por los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano, considerando los criterios jurisprudenciales que, al interpretar dichas normas, han emitido los tribunales nacionales y los de orden internacional que tienen a su cargo la aplicación del tratado en cuestión, respectivamente.

Sin embargo, en tanto autoridad de una entidad federativa, está obligado a aplicar el marco normativo local, incluyendo la Constitución Política del Estado de que se trate. Pero incluso, aún en el supuesto de que esta última cuestión pudiera obviarse, puede suceder que sin estar obligado a sujetarse al marco normativo

---

interno, advierta que alguna norma de la Constitución local reconoce el derecho en cuestión, de una forma más extensa, amplia o favorable para la persona.

Se evidencia así, un primer aspecto de la problemática, porque el juez de mérito tendría que decidir si se sujeta al parámetro de control definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obviando las disposiciones en materia de derechos humanos reconocidas por la Constitución local, o bien, optar por integrar dichas normas en el indicado parámetro.

Puede suceder, por otra parte, que el conflicto se le presente a un juez federal, mediante un procedimiento de casación, respecto de la sentencia dictada por un juzgador local o incluso respecto del acto de una autoridad administrativa local. En dicho procedimiento, ante el planteamiento de inconstitucionalidad o inconventionalidad, el juez debe integrar también el parámetro que le servirá para realizar el control de regularidad constitucional.

En principio, como parte del Poder Judicial Federal, está sujeto a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto, aunque no puede dejar de desconocer las normas locales que reconocen derechos humanos y que, en el caso, resultan más protectoras de la persona, en cuanto al derecho de que se trate.

La cuestión a resolver en ambos casos es evidente: ¿las normas constitucionales de las entidades federativas forman parte del parámetro de control de regularidad constitucional?

Cabe advertir que la cuestión rebasa los alcances de este trabajo, porque borda en torno a la posibilidad de que las entidades federativas configuren su propio catálogo de derechos fundamentales y establezcan, incluso, procedimientos de control constitucional o de protección de derechos fundamentales, lo cual no es unánimemente admitido.²⁸

---

²⁸ Caballero Ochoa, José Luis, *“La interpretación conforme, El modelo constitucional ante los tratados internacionales sobre derechos humanos y el control de convencionalidad”*, 2ª. edición, México, Editorial Porrúa e Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 2014, Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, p. 99.

En mi opinión, las entidades federativas están en completa aptitud de reconocer en sus textos constitucionales, los derechos humanos que estimen convenientes, dotándolos del contenido que juzguen adecuado, sin necesidad de atender sobre si tales derechos están o no reconocidos en la Constitución federal. Asimismo, están en posibilidad de configurar los mecanismos de control constitucional o de protección de derechos que estimen conveniente.

A partir de dichas premisas, es de concluir que las normas de derechos humanos que se establezcan en las Constituciones locales sí forman parte del parámetro de control regularidad constitucional.

Primero, porque debe considerarse que una vez reconocido que todos los jueces –ya no sólo los federales- están obligados a efectuar el control de regularidad constitucional²⁹, dichos juzgadores deben analizar los actos o preceptos en conflicto, contrastándolos con el cúmulo de derechos previstos no sólo en la Constitución federal y en los tratados internacionales, sino también en la Constitución local, porque dicho cuerpo normativo es norma vigente y reconocedora de derechos, que les resulta de aplicación obligatoria, al constituir la Norma Fundamental del estado autónomo o soberano que les ha conferido la potestad jurisdiccional.

Así se desprende también de lo dispuesto por la propia Constitución federal, en sus artículos 41 y 133, al advertir que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las particulares de los Estados, y que “los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución [federal], leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”, lo cual significa que tales

---

²⁹ Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 18/2012, de rubro: Control de constitucionalidad y de convencionalidad (reforma constitucional de 10 de junio de 2011). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1; Pág. 420.

---

normas constitucionales o legales locales, cuando no sean contrarias al pacto federal, siempre deben ser aplicadas.

Además, únicamente de esa manera es posible que los juzgadores estén en posibilidad de aplicar el principio pro-persona, cuando la norma más favorable es la que se encuentra en la Constitución local.

Por otra parte, tal conclusión también es congruente con la idea fundamental que permea en el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la conformación del parámetro de control de regularidad constitucional, según la cual el sistema de fuentes no es relevante, pues en realidad de lo que se trata es de analizar cómo se relacionan las normas de derechos humanos, sin que resulte trascendente su origen o ubicación en el sistema jurídico.³⁰

Al respecto, Ferrer Mac-Gregor explica que las Constituciones o la jurisprudencia nacional pueden válidamente ampliar el bloque de regularidad constitucional –lo cual está incluso permitido por el artículo 29.b) de la Convención Americana - a fin de que formen parte del mismo “otros tratados, declaraciones e instrumentos internacionales, así como informes, recomendaciones, observaciones generales y demás resoluciones de los organismos y tribunales internacionales”³¹, lo cual permite crearnos una idea sobre la maleabilidad del parámetro de control de regularidad constitucional, sustentada dicha cualidad en la necesidad que tiene el operador de configurar, en cada momento, el régimen más protector a la persona.

Por tanto, a efecto de dar funcionalidad al sistema de protección de derechos fundamentales, mediante el control de regularidad constitucional, debe concluirse que el parámetro que habrán de utilizar los jueces tiene una configuración abierta, de tal forma que se incluyan en él, en cualquier momento, las normas que reconozcan derechos humanos y que tengan vigencia temporal, personal y

---

³⁰ Sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de tesis 293/2011, foja 21.

³¹ Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad”, en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (coord.), *La reforma constitucional de derechos humanos: Un nuevo paradigma*, México, Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, pp.340.

---

territorial para el caso concreto, así se trate de disposiciones constitucionales federales o locales, nacionales o convencionales.

Ahora bien, en cuanto a la conformación del parámetro de control de regularidad constitucional, en lo que específicamente se refiere a las candidaturas independientes, cabe señalar lo siguiente.

En México, durante mucho tiempo, la atribución para postular candidatos a cargos de elección popular constituyó un monopolio de los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.³²

Sin embargo, el nueve de agosto de dos mil doce, se publicó la reforma al artículo 35, fracción II de la Constitución federal, para incorporar el derecho de los ciudadanos a solicitar el registro de sus candidaturas a puestos de elección popular, cuando lo soliciten de manera independiente –a los partidos políticos- y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación de la materia.³³

Por tanto, puede afirmarse que es a partir de dicho momento, que el derecho a ser registrado como candidato independiente a cargos de elección popular, forma parte de los derechos fundamentales de participación política de los mexicanos y, por tanto, del parámetro de control de regularidad constitucional.

Como ha sido referido, el Tribunal Interamericano sostiene que “el derecho internacional no impone un sistema electoral determinado ni una modalidad

---

³² Artículo 41, Base I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

³³ El 27 de diciembre de 2013 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reformó el artículo 116 de la Constitución Federal, a fin de establecer, por lo que hace a los regímenes electorales de las entidades federativas, el reconocimiento de las candidaturas independientes, al establecerse que debían fijarse en las Constituciones locales, las “bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de esta Constitución.”

---

determinada de ejercer los derechos a votar y a ser elegido”³⁴, según se desprende de las normas que regulan los derechos políticos -tanto del ámbito universal como regional- así como de las interpretaciones llevadas a cabo por sus órganos oficiales de aplicación.

En tal virtud, el derecho a ser registrado como candidato independiente a los partidos políticos, se incorporó como un derecho fundamental de los mexicanos, en virtud de la reforma del año dos mil doce.

No obstante que no tiene su origen en el ámbito convencional, a partir de su reconocimiento en sede nacional, el derecho a ser postulado como candidato independiente, en la sistematicidad e interrelación del parámetro de control de regularidad constitucional, opera con una lógica potencializadora y se favorece de las condiciones de restricción que aplican a los derechos políticos estrictamente convencionales.

Por tanto, puede afirmarse que, en la configuración del parámetro de control de regularidad constitucional en materia de candidaturas independientes, tenemos que, conforme al artículo 23 de la Convención Americana, todos los ciudadanos deben gozar de los derechos y oportunidades de participar en la dirección de los asuntos públicos, así como de ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

Asimismo, está definido que el ejercicio de tales derechos y oportunidades puede reglamentarse, exclusivamente, por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente, en proceso penal.

Previsiones semejantes se encuentran establecidas en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual establece que todo ciudadano goza, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra

---

³⁴ Sentencia del caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008, párrafo 162.

---

condición social, y sin restricciones indebidas, de los derechos y oportunidades de participar en la dirección de los asuntos públicos, así como de ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

Como ya fue indicado, ambos instrumentos y los demás que configuran el sistema interamericano de protección de derechos humanos, han sido interpretados por la Corte Interamericana en el sentido de concluir que no reconocen un derecho a ser registrado como candidato independiente, aunque las disposiciones referidas sí integran el parámetro de control, en cuanto a la razonabilidad de las limitaciones a dicho derecho, una vez que ha sido reconocido por uno de los Estados parte.

Por otra parte, en cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los indicados artículos 35, fracción II y 116, fracción IV, inciso k) de la Norma Fundamental, no se advierten mayores parámetros respecto a las condiciones para el ejercicio del derecho de que se trata, si bien se garantiza el derecho a financiamiento público y el acceso a la radio y la televisión, aunque siempre en los términos que establezcan cada Constitución local y las leyes correspondientes.

El artículo 41 de la propia Constitución federal, en su Base III, también contiene algunas previsiones en cuanto a los candidatos independientes, al establecer que tendrán derecho de acceso a prerrogativas (recursos económicos, radio y televisión), en los términos que establezca la ley. Aunque sí establece una precisión en cuanto a la forma en que distribuye el tiempo en medios de comunicación entre partidos políticos y candidatos independientes.

Por tanto, el derecho y la jurisdicción internacional, haciendo uso del argumento relativo al margen de apreciación nacional, han sostenido la inexistencia del derecho a ser electo para un cargo de elección popular, mediante candidatura independiente a los partidos políticos.

La Constitución Federal, por su parte, reserva en las Constituciones locales y en las leyes, las condiciones de ejercicio del derecho en cuestión.

Pareciera entonces, que el parámetro de regularidad constitucional en los términos definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es relativamente laxo en su configuración, dejando un amplio espectro a la discrecionalidad racional de los legisladores ordinarios y autoridades administrativas.

Dicha situación deriva en grandes complicaciones al momento de calificar si las reglas impuestas en la implementación legal y administrativa de las candidaturas independientes resultan constitucionales y convencionales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 50/2012, relativa a las reformas realizadas a la Constitución del Estado Libre y Soberano de Durango para reconocer las candidaturas independientes, estableció, en suma, que los órganos constituyentes locales cuentan con “libertad de configuración normativa suficiente para ordenar que las leyes regulen, entre otras cosas, los límites de financiamiento y de los gastos que realicen las candidaturas ciudadanas, su fiscalización y transparencia, así como los procedimientos y sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones que les correspondan”³⁵.

Por tanto, en última instancia corresponde a los órganos legislativos locales e incluso a las autoridades electorales de las entidades federativas, con un amplio grado de discrecionalidad, reglamentar la implementación del derecho fundamental a participar en las elecciones populares, mediante una candidatura independiente.

En razón de lo hasta aquí expuesto, se puede advertir también la problemática que resulta cuando ante los tribunales federales se presentan controversias en las que se solicita ejercer control de regularidad constitucional, respecto de normas locales que regulan las candidaturas independientes.

Se ha resaltado ya la dificultad que implica realizar dicho análisis, en primer término, porque en el ámbito internacional no existen disposiciones que establezcan parámetros mínimos a tomarse en consideración al calificar

---

³⁵ Sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 50/2012.

---

determinado esquema legal e incluso se admite que no hay un derecho fundamental en sede convencional, a participar como candidato independiente en los procesos electorales para acceder a puestos de elección popular. Acaso, existe un conjunto de razones con base en las que pueden reglamentarse los derechos de participación política y, por otra parte, las prohibiciones ordinarias a la discriminación.

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se trata de una cuestión que corresponde analizar, calificar y resolver de forma particular a cada país, atendiendo a su específica situación económica, política, social, etcétera, concediendo así un amplio margen de apreciación nacional.

La Constitución federal tampoco aporta mayores elementos que, en la integración del parámetro de control de regularidad constitucional, permitan establecer con claridad si determinada implementación legal de las candidaturas independientes cumple con dicho estándar o no.

En consecuencia, las soluciones que aportan los tribunales al momento de efectuar el referido análisis involucran referencias al derecho comparado, argumentos de falta de proporcionalidad evidente y, en el mejor de los casos, distorsiones en el sistema electoral en su conjunto o violaciones al derecho de igualdad, pero escasamente se alude al contenido esencial del derecho al sufragio pasivo, en la modalidad de candidatura independiente.

Lo anterior deriva, en última instancia, en una diversidad de regulaciones respecto a las candidaturas independientes, que son válidas, constitucionales y convencionales, aunque encuentren una gran disparidad entre sí, de tal forma que el control de regularidad constitucional queda diluido en un simple juicio respecto a la mayor o menor razonabilidad de las normas en cuestión, sin que se pueda determinar con cierto grado de certeza y objetividad, si el derecho fundamental ha sido garantizado o no.

Sobre lo ya anotado, en torno a la manera en que se resuelve el control de regularidad constitucional respecto a las candidaturas independientes, aduciendo una compatibilidad con el sistema de partidos, debe señalarse que con dicho

---

argumento más de una vez se incurre en el error de intentar insertar el régimen de candidaturas independientes en aquél, sin advertir que se trata de instituciones independientes y obviamente distintas, que si bien comparten el mismo escenario de la contienda electoral, ameritan una reglamentación diferenciada que salvaguarde la equidad en la contienda.

En efecto, cuando se controvierte determinado acto de autoridad, como pueden ser las leyes, lineamientos o reglamentos que especifican las condiciones para el registro de las candidaturas, la impugnación generalmente se hace bajo el argumento de que las disposiciones resultan desproporcionadas y, en tal virtud, se dice que restringen indebidamente el derecho fundamental en cuestión.

Sin embargo, en tanto que existe un margen de apreciación nacional respecto al diseño de los sistemas político-electorales; y a que hay una concesión por parte del constituyente federal en favor los órganos constituyentes y legislativos locales para determinar, en ejercicio de su soberanía o autonomía estatal, la manera en que se implementa el régimen de candidaturas independientes, el análisis de los tribunales federales se enfoca generalmente en verificar la debida inserción de la regulación en cuestión, en el sistema electoral de partidos políticos, atendiendo a la funcionalidad del mismo y a la salvaguarda de valores constitucionales relevantes, como es la equidad en la contienda electoral.

Al momento de resolver tales casos, lo cierto es que los tribunales utilizan también la interpretación conforme a la Constitución, a fin de dotar de coherencia al ordenamiento de que se trate, respecto de la Carta Fundamental, lo cual también es de resaltarse, porque ordinariamente se suele entender que dicha técnica únicamente es aplicable tratándose de derechos fundamentales, cuando en realidad aplica a cualquier cuestión a la que se refiera el ordenamiento jurídico en su conjunto.

Como lo explica García de Enterría, “la supremacía de la Constitución sobre todas las normas y su carácter central en la construcción y en la validez del

---

ordenamiento en su conjunto, obligan a interpretar éste...en el sentido que resulta de los principios y reglas constitucionales”.³⁶

Cabría preguntarse si al resolver de dicha manera, atendiendo a parámetros de funcionalidad del sistema electoral y a la interpretación conforme, para salvar valores o principios constitucionalmente relevantes, ¿se está realizando control de regularidad constitucional en los términos en que lo entiende la Suprema Corte de Justicia de la Nación o se efectúa un control constitucional, en los términos tradicionalmente considerados?

En otras palabras, ¿la interpretación que se realiza se efectúa desde una perspectiva de derechos humanos o se acude a una interpretación básicamente constitucional? Quizá la respuesta a esta interrogante no es menor y redundante en una mayor o menor garantía al derecho de que se trata.

En cualquier caso, lo verdaderamente relevante es que la judicatura encuentre la manera de estructurar jurisprudencialmente el contenido y garantía del derecho al sufragio pasivo, en la modalidad de candidaturas independientes, a fin de permitir un ejercicio equitativo de dicho derecho de la manera más homogénea posible para todos los ciudadanos mexicanos.

5. Conclusiones

Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado pronunciamientos en torno a la manera en que se configura el parámetro de control de regularidad constitucional, tales expresiones no se efectuaron en asuntos en los que específicamente se debiera definir tal cuestión, sino que el análisis fue tangencial, de tal manera que no hay un pronunciamiento definitivo al respecto.

---

³⁶ García de Enterría, Eduardo, *La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional*, Navarra, Cuarta Edición, Thomson-Civitas, 2006, p.101.

A fin de dar funcionalidad al sistema de protección de derechos humanos, debe concluirse que el parámetro que habrán de utilizar los jueces tiene una configuración abierta, de tal forma que se incluyan en él, en cualquier momento, las normas que reconozcan derechos humanos y que tengan vigencia temporal, personal y territorial para el caso concreto, así se trate de disposiciones locales o federales, nacionales o convencionales.

El derecho de sufragio es el corazón de los derechos políticos. En sus dos vertientes, se le considera el nervio y sustento de la democracia. Sin embargo, en tanto derecho humano, no es absoluto y amerita de un desarrollo legal y administrativo, que conlleva el establecimiento de requisitos de ejercicio.

En cuanto al sufragio pasivo, uno de los requisitos tradicionalmente requeridos para ser candidato en elecciones populares es ser postulado por un partido político. Tal situación ha sido criticada por estimarse incompatible con los derechos de libertad e igualdad, aunado a que genera la burocratización en los partidos políticos, los que en última instancia acaban alejándose de la ciudadanía y adueñándose del proceso que implica la configuración de la voluntad estatal.

No obstante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concluido que el derecho internacional no impone un sistema electoral determinado ni una modalidad específica de ejercer los derechos a votar y a ser elegido, por lo que los Estados pueden reglamentar su ejercicio al grado de imponer el monopolio de los partidos políticos en la postulación de candidatos, si se estima que se trata de una medida razonable.

El parámetro de control de regularidad constitucional en materia de candidaturas independientes, es particularmente laxo en cuanto a definir los alcances de su implementación por parte de las autoridades legislativas y administrativas electorales.

Por tanto, los juicios de control de regularidad constitucional que se dictan al respecto, se sustentan en consideraciones de derecho comparado y, en el mejor de los casos, en argumentos relativos a distorsiones en el sistema electoral en su conjunto o violaciones al derecho de igualdad, pero escasamente se alude al

contenido esencial del derecho fundamental de que se trata. En tal virtud, existe una diversidad de regulaciones respecto a las candidaturas independientes que son válidas, constitucionales y convencionales, aunque sean dispares entre sí, sin que sea posible advertir, con cierto grado de certeza, objetividad y razonabilidad, si el derecho fundamental ha sido garantizado o no.

La judicatura constitucional debe argumentar para configurar, con coherencia y razonabilidad, elementos que doten de contenido y garantía al derecho político en cuestión, a fin de homogeneizar en la medida de lo posible, su ejercicio en todo el territorio nacional.

6. Bibliografía

Libros y artículos

- ANGULO JACOBO, Luis Fernando, “El control difuso de convencionalidad en México”, *Revista del Instituto de la Judicatura*, México, 2013, Número 35, 324 p.
- AYALA CORAO, Carlos, *Del diálogo Jurisprudencial al control de convencionalidad*, México, Editorial Porrúa e Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 2013, Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, 111 p.
- ARAGÓN, Manuel, “Derecho electoral: sufragio activo y pasivo”, en Dieter Nohlen et al. (comps), *Tratado de derecho electoral comparado de América Latina*, México, Fondo de Cultura Económica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Universidad de Heidelberg, International IDEA, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e Instituto Federal Electoral, 2007, 1364 p.
- CABALLERO OCHOA, José Luis, *La interpretación conforme, El modelo constitucional ante los tratados internacionales sobre derechos humanos y el control de convencionalidad*, 2ª. edición, México, Editorial Porrúa e Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 2014, Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, 292 p.
- CARMONA Tinoco, Jorge Ulises, “Apuntes al control de convencionalidad”, http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/apuntes_al_control_de_convencionalidad.pdf, 10 p.
- DE LA PEZA, José Luis, “Candidaturas independientes”, en Dieter Nohlen et al. (comps), *Tratado de derecho electoral comparado de América Latina*, México, Fondo de Cultura Económica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Universidad de Heidelberg, International IDEA, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e Instituto Federal Electoral, 2007, 1364 p.
- FERNÁNDEZ Segado, Francisco, “Las candidaturas electorales”, en Dieter Nohlen et al. (comps), *Tratado de derecho electoral comparado de América Latina*, México, Fondo de Cultura Económica, Instituto Interamericano de Derechos

- Humanos, Universidad de Heidelberg, International IDEA, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e Instituto Federal Electoral, 2007, 1364 p.
- FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, "Reflexiones sobre el control difuso de convencionalidad, a la luz del caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México", *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, México, Nueva serie, Año XLIV, 2011, núm. 131, mayo-agosto, <http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/131/inf/inf20.pdf>.
- , "Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad", en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (coord.), *La reforma constitucional de derechos humanos: Un nuevo paradigma*, México, Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, 449 p.
- FIX-FIERRO, Héctor, *Los derechos políticos de los mexicanos*, Segunda edición, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2195>
- FIX-ZAMUDIO, Héctor, *Estudio de la defensa de la constitución en el ordenamiento mexicano*, México, Editorial Porrúa, 2011, 499 p.
- GARCÍA de Enterría, Eduardo, *La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional*, Navarra, Cuarta Edición, Thomson-Civitas, 2006, 325 p.
- GONZÁLEZ Oropeza, Manuel, *Candidaturas independientes*, <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/sufragio/cont/4/ens/ens7.pdf>
- HERNÁNDEZ Olmos, Mariana, "Candidaturas independientes. Experiencias y Desafíos", en Karolina Giles y Medina Torres (coords.) *Candidaturas independientes. Desafíos y propuestas*, México, Tirant lo Blanch, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e Instituto Estatal Electoral de Morelos, 2014, 357 p.
- HERRERÍAS CUEVAS, Ignacio Francisco, *Control de convencionalidad y efectos de las sentencias*, México, Editorial UbiJus, 2011, 143 p.
- JIMENA Quesada, Luis, *Jurisdicción nacional y control de convencionalidad, A propósito del diálogo judicial global y de la tutela multinivel de derechos*, 1a. ed., Pamplona, Thomson Reuters Aranzadi, 2013, 174 p.
- PÉREZ Royo, Javier, *Curso de Derecho Constitucional*, Decimotercera edición, Madrid, Marcial Pons, 2012, 894 p.
- PICADO, Sonia, "Los derechos políticos como derechos humanos", en *Treatise on Compared Electoral Law of Latin America*, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2007, http://www.idea.int/publications/electoral_law_la/upload/III.pdf
- RUBIO LLORENTE, Francisco, *La forma del poder*, 3a. ed., Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2012, volumen 1, 570 p.
- SILVA García, Fernando, *Jurisprudencia Interamericana sobre Derechos Humanos, Criterios Esenciales*, México, Tirant lo Blanch, 2012, 598 p.
- VALDEZ Zamudio, Olivia Yaneli, "Regulación jurídica de las candidaturas independientes en México", en Karolina Giles y Medina Torres (coords.) *Candidaturas independientes. Desafíos y propuestas*, México, Tirant lo Blanch, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e Instituto Estatal Electoral de Morelos, 2014, 357 p.
- El control de convencionalidad ex officio. Origen en el ámbito regional americano, obligatoriedad para los jueces mexicanos, precisión de sus alcances y retos

para el Poder Judicial de la Federación, Serie Cuadernos de Jurisprudencia, Número 8, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octubre de 2012, 72 p.

Observaciones, Sentencias y Resoluciones

Observación General No. 25, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, Artículo 25 - La participación en los asuntos públicos y el derecho de voto, 57º período de sesiones, (1996), <http://www.umn.edu/humanrts/hrcommittee/Sgencom25.html>

Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

Caso Almonacid Arellano vs. Chile, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006.

Caso Cabrera García y Montiel Flores vs México, Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010.

Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009.

Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006.

Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008.

Caso Yatama vs. Nicaragua, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005.

Resolución dictada en el procedimiento de Supervisión de Cumplimiento de la Sentencia del caso Gelman vs. Uruguay. Resolución de 20 de marzo de 2013.

Sentencias y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Contradicción de Tesis 293/2011; Expediente Varios 912/2010, Acción de Inconstitucionalidad 50/2012, y Jurisprudencia número 18/2012, de rubro: CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1; Pág. 420.

Tratados y Legislación

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Normas Electorales Internacionales: Directrices para revisar el marco legal de las elecciones, Idea Internacional, <http://www.idea.int/publications/ies/loader.cfm?csmodule=security/getfile&pageid=10643>